



## A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

El **Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea**, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente *Proposición no de ley sobre el Acuerdo Económico y Comercial Global (AECG-CETA)* para su debate en la **Comisión de Asuntos Exteriores**.

### Exposición de Motivos

Una vez conocido el texto del Acuerdo Económico y Comercial Global (AECG, CETA por sus siglas en inglés; en adelante, el Acuerdo) entre Canadá y la Unión Europea, del 26 de septiembre de 2014 (presentado en su nueva versión el 29 de febrero de 2016); y una vez hecha pública la intención de proceder y avanzar de manera inmediata en la firma y aplicación provisional del Acuerdo en el seno de las instituciones europeas (reuniones previstas: 12 y 13 de octubre de las REPER, 17 de octubre del CAE y 20 y 21 de octubre del Consejo de la Unión Europea) entendemos que deviene de forma inextricable la necesidad de trasladar el debate con anterioridad y suficiente previsión al organismo competente para la prestación del consentimiento ante la negociación y firma de Tratados Internacionales (Capítulo Tercero del Título III de la Constitución Española de 1978).

El Congreso de los Diputados muestra su preocupación ante la total desatención a las recomendaciones recogidas en la resolución del Parlamento Europeo, de 8 de julio de 2015, del Parlamento Europeo a la Comisión Europea relativas a las negociaciones de la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión (2014/2228(INI)), constaba la necesidad de *“velar por que el acuerdo garantice el pleno respeto de las normas de la UE en materia de derechos fundamentales a través de la inclusión de una cláusula de derechos humanos, que deberá ser jurídicamente vinculante y suspensiva, como un componente estándar de los acuerdos comerciales de la UE con terceros países”*. Estas recomendaciones no han sido respetadas por parte de la Comisión Europea.

El Acuerdo Económico y Comercial Global (CETA) es un acuerdo integral de carácter mixto que afecta y afectará tanto a competencias exclusivas de la Unión Europea como a competencias nacionales y regionales, de modo que no se puede obviar ni tratar de eludir el debate parlamentario con anterioridad a procesos fundamentales como lo son la firma, la aplicación provisional (prevista en el Tratado) o la ulterior ratificación. A día de hoy, han sido tres los parlamentos autonómicos (València, Catalunya y Extremadura) los que han instado al Gobierno en funciones a que se abstenga a autorizar la firma y aplicación del CETA. Este Gobierno, una vez más -y a pesar de su estatus *en funciones*- no ha dejado de presionar para lograr la ratificación del Acuerdo Comercial con Canadá -a sabiendas de que no contaba con el refrendo parlamentario y a sabiendas de no haber informado debidamente a las Cámaras, como recoge la Constitución- ni tampoco



para abogar por una aplicación provisional del CETA «*cuanto antes*», sin que el Congreso de los Diputados se pronuncie ni se haya pronunciado al respecto.

El Congreso de los Diputados debe velar para que el comercio internacional sea respetuoso con el desarrollo humano y en particular cumpla con las normas y pactos internacionales de los derechos humanos, los derechos laborales, derechos sociales y normas medioambientales vinculantes, así como con la protección y promoción de la diversidad cultural y el rechazo a la inclusión en acuerdos internacionales de cualquier cláusula de arbitraje privado que menoscabe el respeto de las soberanías nacionales y regionales. El Acuerdo Económico y Comercial Global (CETA) entre Canadá y la Unión Europea en su versión actual todavía prevé un mecanismo de resolución de diferencias entre inversores y Estados (ISDS, por sus siglas en inglés, ahora llamado Tribunal ICS) y la posibilidad para inversores de recurrir a tribunales privados de arbitraje que amenazan la soberanía de los Estados y las competencias no sólo de los parlamentos nacionales y autonómicos, también de los municipios y las instituciones de carácter local, y pueden poner en peligro el derecho a regular y tomar medidas frente a las desigualdades sociales, la emergencia social de la población afectada por la crisis, los desequilibrios territorios, el cambio climático o la crisis que sufre el mundo rural y muchas explotaciones agrarias. Tanto la Asociación Europea de Jueces y la asociación Jueces para la Democracia la nueva propuesta de la Comisión Europea para la resolución de disputas entre inversor y Estado altera la arquitectura jurídica de la UE y debilita las facultades de los tribunales nacional en virtud de la legislación europea;

El Acuerdo omite asimismo el «principio de precaución», base del ordenamiento jurídico europeo, recogido en el artículo 191 del Tratado de la Unión Europea, lo cual puede poner en peligro la salud humana o el medio ambiente. No cumple tampoco los preceptos recogidos en la Resolución del Parlamento Europeo del 14 de febrero de 2006 sobre la cláusula sobre derechos humanos y democracia en los acuerdos de la Unión Europea (2005/2057(INI)).

Los estados miembros de la Unión Europea han acordado celebrar el próximo 18 de octubre en Luxemburgo un Consejo Especial de Política Exterior para debatir sobre el controvertido Acuerdo Económico y Comercial Global (CETA).

En la agenda está la adopción de las propuestas de la firma y la aplicación provisional del CETA y el envío del proyecto de decisión sobre la conclusión del acuerdo al Parlamento Europeo.

En la reciente reunión informal de Ministros de Comercio en Bratislava así como en las últimas reuniones del Comité de Política Comercial (TPC) del Consejo de la UE y en la reunión de COREPER II del 28 de septiembre, varios Estados miembros tales como





Por todo ello el Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta la siguiente

“El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a:

- Congreso de los Diputados, 4 de octubre de 2016.

Pablo Bustinduy Amador  
Diputado y Portavoz en la Comisión de Asuntos Exteriores

Sònia Farré i Fidalgo  
Diputada y Portavoz Adjunta en la Comisión de Asuntos Exteriores



Miguel Bustamante Martín  
Diputado y vocal en la Comisión de Asuntos Exteriores

Antonio Gómez-Reino Varela  
Diputado y vocal en la Comisión de Asuntos Exteriores

Íñigo Errejón Galván  
Portavoz del Grupo Parlamentario